

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. \_\_\_\_\_

Santiago de Cali, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Control inmediato de legalidad (artículo 136 CPACA)
MUNICIPIO DE YOTOCO	Decreto No. 086 de septiembre 1 de 2020.
EXPEDIENTE:	76001-23-33-009-2020-01147-00

I. AUTO QUE NO AVOCA CONOCIMIENTO

1.1. PRESUPUESTOS.

El Municipio de Yotoco, Valle del Cauca, envió al correo electrónico: [repartoaccionesconcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:repartoaccionesconcali@cendoj.ramajudicial.gov.co) de la Oficina Apoyo de los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali, para el ejercicio del medio de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136<sup>1</sup> del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) copia auténtica del **Decreto No. 086 de septiembre 01 de 2020** “*Por medio del cual se levanta la suspensión de los términos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa*”, expedido por el alcalde municipal de Yotoco.

1.2. COMPETENCIA.

Este Tribunal tiene competencia para conocer en única instancia del control inmediato de legalidad, en virtud de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151<sup>2</sup> del CPACA.

II. CONSIDERACIONES.

Procede el despacho a resolver sobre avocar el control inmediato de legalidad respecto del **Decreto No. 086 de septiembre 01 de 2020** “*Por medio del cual se levanta la suspensión de los términos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa*”, expedido por el alcalde municipal de Yotoco.

<sup>1</sup> **Artículo 136. Control inmediato de legalidad.** Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

<sup>2</sup> “**Artículo 151. Competencia de los Tribunales Administrativos en única instancia.** Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (...)

14. Del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.”



Para ello es necesario anotar, que el pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote de la enfermedad COVID-19 (acrónimo del original *coronavirus disease 2019*<sup>3</sup>) como una pandemia, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de marzo 12 de 2020, declaró «*la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020*», en consecuencia, ordenó a los jefes y representantes legales de las entidades públicas y privadas adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación de dicha enfermedad.

Acto seguido, el señor Presidente de la República, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante Decreto 417 de marzo 17 de 2020, con miras a atender la crisis económica y social derivada de la pandemia COVID-19, que duró hasta abril 17 y ante la persistencia de la crisis derivada de la pandemia COVID-19 se vio precisado a dictar nuevamente el estado de excepción por Decreto 637 de mayo 6 de 2020<sup>4</sup>, por el término de otros treinta días calendario, el cual feneció en junio 6 de 2020.

Durante la vigencia del primer estado de excepción, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo No. 491 de 2020<sup>5</sup>, la revisión imperativa de esta disposición está atribuida a la Corte Constitucional, corporación que mediante Boletín No. 116 (complemento del Boletín de Prensa No. 115) de julio 9 de 2020<sup>6</sup>, informó que encontró ajustado a la constitución el citado decreto.

Descendiendo al caso concreto, advierte el ponente que el **Decreto No. 086 de septiembre 01 de 2020** enuncia en la parte considerativa, que el municipio de Yotoco expidió el Decreto 051 de abril 9 de 2020 “*Por medio del cual se suspenden los términos de trámites y actuaciones administrativas en la administración municipal durante la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 y se dictan otras disposiciones*” y también expresó que teniendo en cuenta que debe garantizar el funcionamiento de los servicios del estado, entendiendo en estricto sentido la administración municipal considera necesario reanudar los términos legales de los procesos administrativos a cargo de la misma, a efecto de garantizar la buena marcha de la administración pública, por tanto acogerá la medida de levantamiento de suspensión de términos en la administración municipal a partir del primero de septiembre del presente año.

En consideración de lo anterior, el Decreto No. 086 de septiembre 01 de 2020 que expidió el alcalde de Yotoco no es pasible de ser conocido a través del medio de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del CPACA por razones pasan a exponerse:

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Salud (OMS), ed. (11 de febrero de 2020). «*Intervención del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre el 2019-nCoV de febrero 11 de 2020*». Consultado en abril 15 de 2020 en: <http://web.archive.org/web/20200220051931/https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>.

<sup>4</sup> “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”

<sup>5</sup> Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

<sup>6</sup> <https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-declara-constitucional,-en-general,-el-Decreto-Legislativo-491-de-2020,-con-excepci%C3%B3n-del-Art%C3%ADculo-12,-por-vulnerar-el-principio-de-autonom%C3%ADa-de-las-ramas-Legislativa-y-Judicial-del-Poder-P%C3%ABlico-8958>



El control de que trata el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, fue incluido en el artículo 136 del CPACA (Ley 1437 de 2011)<sup>7</sup> que, además, dispuso que la autoridad judicial debía asumir de oficio el conocimiento del asunto, en caso de que la correspondiente autoridad administrativa no efectuare el envío del acto sujeto a control.

De conformidad con las normas mencionadas, para que las medidas administrativas estén sujetas al control inmediato de legalidad, deben cumplir las siguientes dos características: *i)* ser de carácter general y *ii)* *ser expedidos en desarrollo de los decretos legislativos dictados por el presidente de la República.*

Sobre esta segunda característica, téngase en cuenta que el acto administrativo deberá contener disposiciones que estén encaminadas a permitir la ejecución o aplicación del decreto legislativo (en ello consiste su desarrollo).

Del contenido del decreto acusado, en sus sustentos constitucionales y legales, se observa que tiene fundamento en el artículo 315 numeral 2º de la Constitución Política y en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, por tanto, encuentra el Tribunal que, si bien fue dictado en ejercicio de la función administrativa el ejecutivo municipal, no lo fue en desarrollo de los *decretos legislativos* dictados por el Presidente de la República durante el estado de excepción, en especial el Decreto Legislativo No. 491 de 2020 que habilito en el artículo 6º la autorización para la suspensión de las actuaciones administrativas y judiciales en sede administrativa medida temporal que pretendió superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades en razón de las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el COVID-19, ya que lo que dispone el decreto objeto estudio es levantar la suspensión de los términos que habían sido suspendidos a través del Decreto 051 de abril 9 de 2020 “*Por medio del cual se suspenden los términos de trámites y actuaciones administrativas en la administración municipal durante la emergencia sanitaria por causa del Covid-19 y se dictan otras disposiciones*” en el municipio de Yotoco.

## CONCLUSIÓN

Por lo tanto, es evidente que el mencionado decreto municipal no se dictó *en desarrollo* de decretos legislativos derivados expedidos por el señor Presidente de la República dentro del estado de excepción declarados con los Decretos Nacionales 417 de marzo 17 y 637 de mayo 6 de 2020. Ello permite concluir que el referido decreto no es pasible del control automático previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, motivo por el cual dicho acto escapa al medio de control inmediato de legalidad, sin perjuicio de que pueda ser demandado a través de los demás medios de control procedentes que prevé el CPACA.

---

<sup>7</sup> **Artículo 136. Control inmediato de legalidad.** Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.



En consecuencia, el Tribunal no avocará tal estudio.

#### IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: NO ASUMIR** el conocimiento del control inmediato de legalidad del **Decreto No. 086 de septiembre 01 de 2020** *“Por medio del cual se levanta la suspensión de los términos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”*, expedido por el alcalde municipal de Yotoco.

**SEGUNDO:** Por secretaría, **NOTIFICAR** esta providencia por vía electrónica a la autoridad remitente, municipio de Yotoco, lo mismo que a los correos electrónicos del señor Agente del Ministerio Público Procurador 18 Judicial Delegado II, [soguzman@procuraduria.gov.co](mailto:soguzman@procuraduria.gov.co) y [procjudadm18@procuraduria.gov.co](mailto:procjudadm18@procuraduria.gov.co)

**TERCERO: ORDENAR** que esta providencia se publique en la página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo junto con la copia de los actos administrativos a que hace referencia, para conocimiento de la comunidad.

**CUARTO:** Una vez ejecutoriada esta providencia, **ARCHIVAR** el expediente, previas las anotaciones de rigor.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA**  
Magistrado.